

PARTE I.

EL EMPRENDIMIENTO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL POSCONFLICTO

Después de sesenta años de conflicto, el 26 de septiembre de 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de turno firmaron el cese de hostilidades que llevó consigo la dejación de armas y el cese de toda actividad violenta por parte del grupo insurgente. Esto conlleva un esfuerzo importante no solo por parte del Gobierno sobre gasto público, sino también por parte del sector privado y la academia en un acompañamiento que permita consolidar el proceso de dejación de armas y alcanzar una paz estable y duradera.

Por lo anterior, se ha visto el emprendimiento como herramienta para la generación de ingresos de las personas que buscan superar todos los daños ocasionados por la guerra, los cuales “son los resultados de acciones violentas que han vulnerado los derechos de personas y comunidades y que han producido dolor, sufrimiento y distintas afectaciones en dimensiones íntimas, familiares, sociales, políticas, culturales y productivas” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018, p. 10). El emprendimiento productivo se convierte en facilitador de la reintegración, ya que las actividades que generan ingresos son un elemento esencial de los programas de reincorporación al proporcionar nuevas oportunidades para su subsistencia. Por ende, se han generado diversas propuestas de orden nacional para beneficiar a las poblaciones que han visto vulnerados o reducidos sus derechos por estar directamente en una zona de conflicto, todo dentro de la Política Nacional de Emprendimiento, la cual tiene cinco grandes objetivos estratégicos:

Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial; promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente creación; promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en Colombia; fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha; y promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017, párr. 5)

La creación de estas iniciativas tiene como apuesta que los emprendimientos locales ayuden en la reconstrucción del tejido y capital social entre los actores a partir de las diferentes actividades económicas y productivas en que habrá diferencias, pero con un objetivo en común. Además, el emprendimiento impacta otras dimensiones como la seguridad, la reconciliación y la política.

En este sentido, el emprendimiento es una opción socioeconómica importante para el departamento, dado que, como lo indica la Gobernación del Valle del Cauca (2018), “el Valle es la tercera región del país con más recepción de víctimas” (p. 49), que son en su mayoría mujeres sometidas a hechos de abandono, desplazamiento o despojo forzado (81,3 %).

Pereira (2013) plantea dos elementos en los cuales se puede contribuir. El primero es la necesidad de estudios más profundos que ayuden a identificar las motivaciones que impulsan a los colombianos a emprender, específicamente, de zonas rurales afectadas por el conflicto. Y el segundo, ayudar en la configuración de incentivos de emprendimientos sostenibles identificando las capacidades de la comunidad (Escandón-Barbosa, 2015).

Esta parte es resultado del proyecto “Emprendimiento y posconflicto: una mirada al Valle del Cauca”, que pretendió conocer la realidad de las víctimas pertenecientes a esta población en temas de generación de ingresos o negocios después más de cuatro años de la firma del acuerdo de paz, para lo cual se realizó un diagnóstico del ecosistema emprendedor del Valle del Cauca y sus diferentes actores y el estudio de las posibilidades actuales de la creación de emprendimiento, en particular, de la población rural y urbana víctima del conflicto en Buga y Tuluá en el Valle del Cauca.

La metodología para el desarrollo del proyecto fue una combinación entre lo cuantitativo y cualitativo, realizando grupos focales, entrevistas y una encuesta, esta última basada en un muestreo no probabilístico

por conveniencia para la aplicación de las encuestas debido a que la información disponible de esta población se presenta de forma agrupada y no por microdatos, lo que no permitió identificar su ubicación; además, el censo no incluye todas las variables de las cinco dimensiones analizadas.

En este sentido, la encuesta estaba compuesta de 48 preguntas en las cinco dimensiones usando la escala de Likert: demográfica (características de las víctimas y sus familias), económica (ocupación, generación de ingreso, entre otros), social (competencias en emprendimiento), institucional (ecosistema de emprendimiento, entidades, entre otros) y productiva (tradición productiva, ventajas competitivas, etc.). La población encuestada fue de 200 personas víctimas mayores de edad, seleccionadas mediante un muestreo no aleatorio por conveniencia, que residían en el área urbana y rural de Buga y Tuluá. La población rural encuestada (corregimientos de Venus, La Diadema y La Moralia en Tuluá, y corregimientos de Alaska-La Habana, El Placer y Crucero-Nogales en Buga) venía adelantando un proceso de diálogo y construcción de tejido social por parte del Observatorio de Paz del Valle del Cauca (iniciativa liderada por la Secretaría de Paz Territorial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]); el acceso a la población urbana víctima se obtuvo gracias a las personas que asistían a la Oficina de Víctimas de los dos municipios. Este instrumento se utilizó para conocer las competencias, las habilidades y los conocimientos en emprendimiento de la población.

Asimismo, se llevaron a cabo grupos focales y entrevistas individuales con los principales actores regionales y locales relacionados con la gestión de reparación de las víctimas y de los ecosistemas de emprendimiento, para conocer la dinámica y las opciones disponibles en temas de emprendimiento para esta población. Además, el ejercicio se socializó en las mesas municipales de víctimas y se apoyó en las unidades de atención a víctimas municipales.

Esta parte está compuesta por tres capítulos. En el primero, se presenta un marco de referencia para el análisis, en que se expone una breve descripción de las teorías económicas en las cuales se basa el

proyecto y los principales antecedentes sobre el tema. En el segundo capítulo, se presenta la caracterización de los ecosistemas y de las rutas de emprendimiento del Valle del Cauca y las iniciativas para la población víctima con sus respectivas conclusiones, con el fin de brindar el contexto institucional del emprendimiento en el departamento y para la población en la cual se enmarca la investigación. En el tercer capítulo, se exponen los resultados de la caracterización de la población víctima analizada en las cinco dimensiones estudiadas y las deducciones de los autores al respecto.

Referencias

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *Daños: análisis de los impactos del conflicto armado colombiano*. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/danos.pdf>

Escandón-Barbosa, D. (2015). *Reporte GEM Colombia 2015/2016*. <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/1565>

Gobernación del Valle del Cauca. (2018). *Plan de Acción Territorial para la Prevención, Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado 2016-2019*. <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10273/plan-de-accion-territorial-para-la-prevencion-atencion-asistencia-y-reparacion-integral-a-victimas-del-conflicto-armado-2016-2019/>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2017). *Política Nacional de emprendimiento*. <http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435>

Pereira, F. (2013). *Reporte GEM Cali 2012*. <https://gemcolombia.org/publicaciones/>

Capítulo 1. Marco de referencia para el análisis

*Sully Tatiana Gutiérrez González
Alexandra Hoyos Bravo
Cérbulo Andrés Cifuentes García*

Introducción

En Colombia, la historia de conflicto y desigualdad a lo largo del tiempo ha influido de diversas maneras en las formas de poner en práctica el emprendimiento, de modo que es la población víctima del conflicto uno de los grupos sociales que requiere un mayor nivel de estudio ante los problemas que concierne.

En primer lugar, se presenta en este capítulo una breve descripción del contexto histórico del conflicto armado en el Valle del Cauca, hasta abordar el caso de Buga y Tuluá, reconocidos históricamente como territorios con presencia de grupos armados y con la ocurrencia frecuente de hechos de violencia.

La literatura existente acerca del conflicto armado en lo concerniente a la perspectiva económica es reciente y escasa, y se concentra, en especial, en países como los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La revisión inició con un contexto internacional, identificando autores que estudian el emprendimiento en condiciones de conflicto y posconflicto y algunos casos de estudio. En el ámbito nacional, se abordan estudios acerca del desarrollo sostenible en posconflicto, emprendimiento indígena y emprendimiento productivo de reinserción y posconflicto. De igual manera, se analizan referentes locales como la caracterización del potencial productivo de pequeños y medianos productores en zonas determinadas de Buga y, finalmente, una aproximación a un enfoque de transitoriedad de la cultura e identidad en la medida en que el entorno afecta la cotidianidad de los individuos y de las comunidades.

El marco teórico definido para el estudio aborda, por una parte, teorías relacionadas con las características que definen a una persona como emprendedor, y por otra, el emprendimiento como facilitador del desarrollo local, en especial, en condiciones de posconflicto.

A partir de lo anterior, se definen las bases teóricas y referenciales que permiten evidenciar la oportunidad de continuar con el estudio del emprendimiento de la población víctima en los municipios definidos del Valle del Cauca en un contexto de posconflicto.

Contexto del estudio

En una connotación histórica, Colombia desde la guerra de los Mil Días (1889-1902) ha tenido básicamente dos periodos de violencia: de 1946 a 1964, llamada la Violencia, y desde 1964 hasta hoy (Moncayo, 2015, citado en Tamayo, 2015); la primera de estas se caracterizó por una polarización de ideales políticos y la segunda por el surgimiento de grupos como las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El conflicto armado generado por los grupos guerrilleros al margen de la ley nombrados conllevó un incremento de tráfico de drogas y el surgimiento de grupos paramilitares, y consiguó problemas de orden ambiental, social y económico en los territorios afectados por su desarrollo.

Los actores y las dinámicas que componen el conflicto armado se han transformado significativamente, y así se vio reducido el número de grupos mediante procesos de negociaciones de paz liderados por diferentes gobiernos como los de Virgilio Barco (M-19) y César Gaviria (MAQL, PRT, EPL), que conllevó una desmovilización de grupos y surgimiento de nuevos, de modo que es el más antiguo las FARC desde su conformación oficial hasta el 24 de noviembre de 2016 que se firmó un acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó cifras consecuencia del conflicto armado en Colombia de 220.000 asesinatos documentados, 5.712.506 desplazamientos forzados, 25.007 desaparecidos, 16.340 asesinatos colectivos, 1.982 masacres, 27.023 secuestrados, 1.754 víctimas de violencia sexual y 6.421 reclutamientos forzados, de los cuales se considera que casi la mitad han sido por acciones de las FARC (El Heraldo, 2016). En el Valle del Cauca, se reportan aproximadamente 600.000 personas, según el Registro Único de Víctimas (RUV); en este sentido, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) indica que 100.898 son menores de edad.

El Valle del Cauca está localizado en el suroccidente del país, gran parte de su territorio se ubica en la Costa Pacífica. Cuenta con una extensión de 21.195 km² y una población estimada para 2016, según el censo realizado en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019), de 4.475.886 habitantes, de los cuales el 14,9 % vive en las zonas rurales y el restante 85,1 % en las cabeceras.

El ordenamiento del territorio a partir de los procesos de poblamiento y asentamiento de los habitantes en el valle geográfico del río Cauca, así como el aprovechamiento económico del territorio y su administración político-electoral, posibilitaron la configuración de un ordenamiento particular con marcadas diferencias (CNMH, 2014, p. 26).

El departamento ha sido receptor de diferentes oleadas de población inmigrante de otras regiones del país, principalmente del Pacífico y de zonas rurales, por las posibilidades laborales existentes (dadas por la industria, la agroindustria y la logística de mercancías), por los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos por parte de la guerrilla, el Ejército, los terratenientes y hacendados o por la delincuencia común.

De la misma forma, en la década de 1980, prolifera el narcotráfico y se acentúan las manifestaciones concretas de la violencia generada por el conflicto armado en el Valle del Cauca: las masacres, el secuestro y

el desplazamiento, reforzada por la penetración de las autodefensas en el departamento. En este sentido, entre 2000 y 2010, se producen 47 masacres, 106 secuestros y se desplaza a 143.290 personas (Acosta, 2012).

Breve descripción de los municipios

Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca, entre la cordillera central y el río Cauca; su posición geográfica es a 4°05'16" de latitud norte y 76°12'03" de longitud occidental. Limita por el norte con los municipios de Andalucía y Bugalagrande; por el sur con los municipios de Buga y San Pedro; por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento del Tolima; por el occidente con el municipio de Riofrío y el río Cauca. Tuluá posee una extensión territorial total de 910,55 km², de los cuales el 98,8 % corresponde al sector rural y el 1,2 % al sector urbano (Ministerio de Trabajo, 2014, p. 136).

Según el censo de 2018, la población de Tuluá se caracterizaba por tener en su mayoría mujeres, la edad de la población se encontraba focalizada en adolescentes de 10 a 14 años y jóvenes adultos entre los 15 y 19 años. Esto puede explicar que el nivel educativo predominante en Tuluá sea básica primaria, seguido del nivel de media académica o clásica, después se encuentra la población con nivel de educación superior o posgrado; la población con un nivel medio técnico profesional o tecnológico tiene una participación del 8,1 %. En cuanto a la diversidad de la población en el municipio, en 2018, el 4,57 % residente en Tuluá se autorreconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (DANE, 2019).

En cuanto a las condiciones habitacionales, en 2018, el 83,70 % de la población vivía en la cabecera municipal, el 11,84 % en un centro poblado y el 4,38 % en el área rural dispersa (DANE, 2019). La mayoría de los residentes de Tuluá viven en casas, seguidos de los que habitan en apartamentos y un 45,6 % en cuartos. La composición de las familias en el municipio

está integrada en su mayoría por cuatro personas o menos. Referente al estado civil de la población, se puede decir que presenta una distribución similar de las personas con una pareja estable (casados, viviendo con una pareja menos de dos años y viviendo con una pareja más de dos años) y los residentes que indicaron estar solteros (DANE, 2019).

Respecto de la procedencia y población nativa del municipio, en 2018, Tuluá contaba con el 41,7 % de población procedente de otro municipio y el 1,4 % de otro país, lo cual deja ver una dinámica de movilidad y capacidad de receptora del municipio. Migrar a otro municipio se puede deber a muchos factores, para el caso de los inmigrantes en Tuluá, lo hicieron en su mayoría por motivos familiares, dificultad para encontrar trabajo, y un 3,5 %, porque su vida estaba en riesgo (DANE, 2019).

El municipio de Buga está situado en la zona centro del departamento del Valle del Cauca a 3°54'07" de latitud norte y 76°18'14" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, a una altura sobre el nivel del mar de 964 m. Tiene una temperatura promedio de 23 °C. Posee una extensión de 832 km² y está separada de la capital departamental por 73,1 km. Limita por el norte con los municipios de San Pedro y Tuluá, por el oriente con el departamento del Tolima, por el sur con los municipios de Cerrito, Ginebra y Guacarí, y por el occidente con el municipio de Yotoco, haciendo límites el río Cauca (Ministerio del Trabajo, 2014, p. 137).

En 2018, se caracterizaba por tener en su mayoría más mujeres que hombres, 52,2 % y 47,8 %, respectivamente. En cuanto a la edad de la población, la mayor parte está entre los 20 y 29 años, estructuralmente es un municipio con una pirámide poblacional más robusta en su base, lo que significa que la población es joven-adulta. El nivel educativo de la población está compuesto en su mayoría de personas con secundaria y media académica o clásica seguido de básica primaria y superior y posgrado. Cabe resaltar que hay un 2,7 % de la población que no tiene nivel de educación. Referente a la diversidad étnica, el 2,1 % de la población residente se autorreconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (DANE, 2019).

Por su parte, el estado conyugal de la población se compone en su mayoría de personas solteras, pero hay un 20,3 % de la población que se encuentra casada y un 25,4 % que está en unión libre; por tanto, aunque la mayor parte de la población se halle en la categoría de soltero, más de un 45 % tiene una relación en la que conviven en un mismo hogar. Además, según el censo del DANE de 2018, los hogares se componen en su mayoría de cuatro o menos integrantes, y los lugares donde conviven las familias y residentes de Buga son en su mayoría casas, mientras el 18,5 % vive en apartamentos (DANE, 2019).

Otro factor importante de analizar es el aspecto de migración o la procedencia de los residentes del municipio. De acuerdo con el censo de 2018, el 37,4 % de los habitantes nacieron en otro municipio, y se ubican en su mayoría en la cabecera de Buga. Y la mayoría de la población que decidió cambiar de residencia en Buga manifiesta que lo hizo por razones familiares y dificultad para conseguir trabajo (DANE, 2019).

Breve descripción de la población víctima en el Valle del Cauca y Buga y Tuluá

Según la Red Nacional de Información (RNI) de la UARIV en 2019 se registraban 8.553.416 personas como víctimas en el ámbito nacional, 534.331 fueron en el Valle del Cauca, de los cuales el 47,4 % son hombres, el 52 % son mujeres, el 0,02 % es población lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual y queer (LGTBIQ+) y el 0,58 % no informa. El 18,1 % de esta población estaba entre 0 y 11 años, el 12,9 % entre 12 y 17, el 55,6 % entre 18 a 60 y el 7,6 % más de 61 (UARIV, 2019)¹.

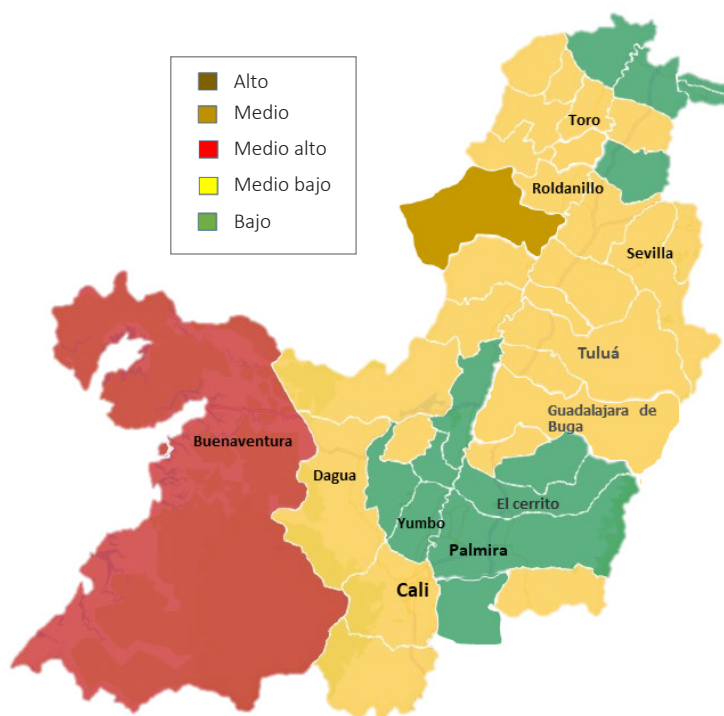
En cuanto a los hechos victimizantes más recurrentes en la población víctima en el departamento, se encontró que el 82,8 % sufrió

¹ El 5,8 % de las víctimas registradas no reportan su edad. Los cálculos fueron realizados por los autores según la información reportada en la Red Nacional de Información (RNI), fecha de corte 2019.

desplazamiento, el 10% homicidio, el 3,5% amenaza, el 1,4% desaparición forzada y el 1% pérdidas de muebles e inmuebles, presentando el mismo orden de los hechos que en el ámbito nacional. Por municipio, se observa que en Buga el 46,0% de los hechos victimizantes fueron por desplazamiento, el 22,9% por homicidio, el 11,7% por amenazas, el 10,0% por desaparición forzada y el 2,8% por acto terrorista, mientras que en Tuluá las víctimas por desplazamiento fueron del 43,5%, del 19,7% por homicidio, del 13,9% por amenazas, del 8,1% por desaparición forzada y del 4,9% por acto terrorista. Cabe resaltar que los actos terroristas no son hechos victimizantes significativos en el ámbito nacional y departamental, pero sí lo son para Buga y Tuluá (Red Nacional de Información [RNI], fecha de corte 2019).

En la figura 1.1, se presenta el índice de riesgo de victimización (IRV) para el Valle del Cauca para este indicador.

Figura 1.1.
Mapa de índice de riesgo de victimización



Fuente: elaboración propia.

El riesgo se entiende como la posibilidad de que una amenaza en un lugar y tiempo determinado se convierta en una violación efectiva a un derecho fundamental. Se construye en función de dos dimensiones: la primera es la amenaza, referida a la naturaleza explícita evidente y generadora del evento causal, y la segunda es la vulnerabilidad, de naturaleza intrínseca, específica y particular al objeto de estudio, al elemento expuesto. Así es como el riesgo puede medirse a partir de la valoración de la manera como los factores implícitos o endógenos del sujeto, grupo o comunidad (vulnerabilidad) le predisponen o hacen susceptible de sufrir un daño, a partir de un fenómeno potencialmente desestabilizador (amenaza). (UARIV, 2018, p. 8)

En este sentido, se puede evidenciar que el Valle del Cauca está clasificado como un departamento con IRV medio (2018), dado que solo Buenaventura presenta un IRV medio alto, comportamiento que es común a los demás municipios que se ubican en la Costa Pacífica en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó.

En estas zonas lo que principalmente ha ocurrido es la transformación del control local de economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, extorsiones), en donde los actores armados ilegales activos, a raíz de la entrega de armas y desmovilización de la guerrilla de las FARC, han venido redefiniendo sus posiciones de poder, en un escenario de fragmentación que ha generado varias disputas que impactan en la población. Esto no quiere decir que la dinámica de la violencia sea más intensa que en el pasado; sin embargo, el hecho de que desaparezcan las estructuras unificadas genera la percepción de mayor incertidumbre, multiplicación de actores y dispersión de esfuerzos para combatirlos. (UARIV, 2018, p. 18)

Al desagregar el indicador, se encuentra que el índice de amenazas en el departamento es en su mayoría bajo al igual que el índice de vulnerabilidad; en este sentido, el Valle del Cauca ha mejorado el IRV en 2018 con respecto a los años anteriores. Sin embargo, es evidente la

presencia de grupos armados organizados (GAO), grupos delincuenciales y disidencias de las FARC.

Los GAO y los grupos delincuenciales se ubican en Cali, Jamundí, Buga, Cartago, Calima y Guacarí donde hay centros de expendio de drogas, cobro de extorsiones y reclutamiento de jóvenes. Las disidencias se concentran en Buenaventura donde existen dos dinámicas. Una en la zona urbana donde hay presencia de las AGC [Clan del Golfo], La Empresa y antiguos milicianos de las FARC que harían parte de las disidencias, y otra, en la zona rural, donde se destaca la situación de la región del Naya. Allí se identifican las disidencias del Frente 30, de la columna móvil Miller Perdomo y de la columna móvil Jacobo Arenas que tuvo más injerencia en el departamento de Cauca. Igualmente, estarían las GUP [Guerrillas Unidas del Pacífico] y otros grupos delincuenciales que buscan controlar el corredor de comunicación entre el norte del Cauca y el Pacífico para comercializar la droga que se produce en los dos departamentos. En el Valle del Cauca los hechos contra la población disminuyeron, pero continuaron siendo altos los números de víctimas de desplazamiento, amenaza y confinamiento. Buenaventura siguió siendo el municipio más afectado, en particular, por el desplazamiento forzado. Del mismo modo, entre 2016 y 2017, fueron asesinados 16 líderes sociales en los municipios de Cali, Buenaventura, Buga, El Cerrito, Sevilla, Jamundí, Guacarí y Cartago. (UARIV, 2018, p. 34)

En Tuluá y Buga, reportaron 26.207 y 10.226 víctimas del conflicto, respectivamente; estos municipios presentan un IRV medio bajo (UARIV, 2019). En la distribución de las víctimas por sexo, se pudo evidenciar que los hombres son los de mayor participación en los dos municipios (49,8 % en Tuluá y 50 % en Buga); no se registra un número importante de población LGTBIQ+ entre las víctimas registradas en estos municipios.

El mayor porcentaje de población víctima es adulta en los dos municipios (57,7 % en Tuluá y 59,1 % en Buga), seguidos de la población adolescente, niños y tercera edad; en Tuluá, se evidencia una participación importante de los adolescentes en la población víctima y se presenta un menor porcentaje de población que no informa su edad.

Estado actual

Los estudios sobre la solución del conflicto armado interno son recientes. Desde antes de la década de 1980 en el mundo y específicamente en Colombia era común encontrar investigaciones de otras disciplinas sobre este fenómeno, pero muy escasos desde la perspectiva económica. Al realizar el análisis bibliométrico usando Scopus² bajo la búsqueda de emprendimiento en posconflicto (*post-conflict entrepreneurship*), se encontró que hay 18 documentos publicados entre 2007 y 2019; en este sentido, los países que lideran el desarrollo en estudios en este tema en el mundo corresponden a los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, estos países representan aproximadamente el 61 % del total de las investigaciones; Colombia participa con solo un artículo.

En el ámbito internacional, Boudreaux (2007) realiza un estudio de Ruanda fundamentado en Boettke y Coyne (2007), que identificó problemas asociados al sector público como el compromiso de cambio real por parte de un régimen, la búsqueda de justicia a cambio de sacrificar valioso capital humano y responsabilizar a los victimarios por actos que en el régimen anterior no eran ilegales, pero sí generaron efectos negativos a la población. A partir de este enfoque, plantea que la justificación de la reconciliación es, por supuesto, el deseo de evitar conflictos futuros y costosos. Con la esperanza de prevenir el derramamiento de sangre de represalia, los gobiernos (y los organismos internacionales y los donantes) deben llevar a cabo juicios de crímenes de guerra y otros

² Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de la literatura: revistas científicas, libros y actas de congresos.

esfuerzos de reconciliación diseñados para reunir a los enemigos a fin de lograr un mínimo de justicia y promover la "sanación". En este sentido, se pudo evidenciar que el comercio y las empresas de Ruanda después de los conflictos están dando lugar a un aumento de los niveles de cooperación entre los antiguos enemigos; así es como la interacción económica proporcionó una alternativa rentable a los programas de reconciliación liderados por el Estado como un mecanismo para la justicia y la reconciliación. Por consiguiente, los gobiernos que buscan brindar justicia transicional y reconciliación eficaces deben facilitar los esfuerzos del sector privado trabajando activamente para mejorar el entorno institucional para hacer negocios.

Brück et al. (2013) ofrecen una visión general de dos ediciones especiales de *Journal of Small Business and Entrepreneurship* (2011) y *Journal of Conflict Resolution* (2013) dedicados a los impactos de los conflictos armados en el espíritu empresarial en países en vías de desarrollo. Los autores analizan el emprendimiento en condiciones de conflicto en consideración a los aportes de Naudé (2013) acerca de su efecto devastador en la actividad económica, la tenacidad del emprendimiento durante este y la capacidad de adaptarse de diversas formas que no necesariamente generan crecimiento económico. Luego, según los documentos de las ediciones especiales, definen que los conflictos armados tienen diversos impactos en los empresarios y los procesos, la inversión y la producción de las empresas, y que hay muchas formas de superar sus consecuencias. En realidad, las ganancias del posconflicto generalmente vienen dadas por la reconstrucción del mercado, aunque esto dependa de forma crucial de las políticas de promoción de emprendimiento.

Djip (2014) examinó las condiciones del emprendimiento en las sociedades en transición y posconflicto utilizando a Bosnia-Herzegovina como estudio de caso. Empleó como enfoque el marco de referencia propuesto por Gnyawali y Fogel (1994) para evaluar ecosistemas de emprendimiento a partir de cinco dimensiones como políticas de

gobierno, condiciones socioeconómicas, habilidades para los negocios, apoyo financiero y no financiero para los negocios. Parte también de los postulados de Aidis (2005) para establecer el rol de los emprendedores en procesos de transición. Este caso de estudio presenta características interesantes como que este país fue parte de Yugoslavia y que tenía un régimen socialista. Como Estado libre, Bosnia-Herzegovina se dirigió hacia la creación y el mantenimiento de una economía basada en el mercado, tras lo cual se convirtió en un país en transición. Este proceso ha sido perturbado y retrasado debido a la guerra que comenzó en 1992. Utilizando el método de triangulación de datos, el autor encontró que se presentan tres tipos de condiciones que influyen en el espíritu empresarial en Bosnia-Herzegovina: sociopolítico, económico y legal, con el cual aportó a comprender la complejidad de los entornos de transición y sus implicaciones en el desarrollo del espíritu empresarial en este tipo de escenarios.

Vorley y Williams (2017) estudiaron la resiliencia económica en el nuevo Estado de Kosovo. El enfoque utilizado recurre a los postulados de Martin (2012), Pendall et al. (2010) y Dawley y Tomaney (2010) para analizar las causas y los efectos de un desarrollo desigual en economías regionales y locales, así como el rol del espíritu empresarial como principio central para la resiliencia económica, entendido este concepto como un proceso continuo de cambio situado en un contexto geográfico. La resiliencia es un concepto emergente que se ha empleado para examinar el desempeño económico y respuesta a los choques exógenos. Basándose en las entrevistas con actores sociales en Kosovo, estos autores encuentran que la política busca mejorar la resiliencia con la actividad económica, dado que el espíritu empresarial es fundamental para promover la diversificación y la creación de capacidad, por lo cual se deben desarrollar medidas institucionales para aprovechar el emprendimiento productivo y reducir la actividad económica informal. Los autores concluyen que la reestructuración en un contexto de posguerra es extremadamente desafiante y requiere enfoques de largo plazo antes de trazar una serie de recomendaciones sobre las implicaciones más amplias de las políticas.

En Colombia, Castillo-Palacio et al. (2017) exploraron cómo la transformación social puede conducir a la transformación urbana, y formar la base para un desarrollo sostenible en posconflicto. En este sentido, se apoyan en las investigaciones de Novelli et al. (2012) y Buultjens et al. (2016), las cuales plantean el rol de las instituciones a fin de generar un ambiente propio para la transformación de la región que ha pasado por una situación de conflicto. Este estudio de caso se basó en datos descriptivos disponibles y observación directa apoyada por fuentes secundarias. Los resultados de la investigación permitieron conocer las condiciones necesarias para desarrollar y gestionar el turismo sostenible en entornos de posconflicto, con el fin de servir como insumo para la toma de decisiones políticas, con especial referencia a las intervenciones sociales y urbanas en la planificación, el diseño y el espíritu empresarial.

Por otro lado, se efectuaron estudios sobre las características del emprendimiento realizado por el indígena colombiano, desarrollado generalmente bajo conceptos de asociatividad (Carbal, 2011; Fierro y Villacres, 2014), sostenibilidad (Fierro, 2013) y perseverancia (Solís y Valencia, 2005). La población indígena es un actor fundamental en el escenario de posconflicto del país, dado que una parte importante de esta población ha sido desplazada y muy probablemente retornará a su sitio de origen una vez se firme la paz. Utilizando un cuestionario realizado a los líderes indígenas, se pudo entrever que “el emprendedor indígena tiene predilección por las actividades tradicionales y rituales ancestrales de su etnia: ecoturismo, artesanías y agricultura. Igualmente, se pudo establecer una clara orientación a realizar estas actividades en sus sitios de origen y a establecer asociaciones de acuerdo con los intereses comunes” (Pitre-Redondo et al., 2017, p. 231).

De la misma forma, Pitre-Redondo et al. (2017) aseguran que el “emprendimiento como mecanismo de competitividad para las comunidades indígenas en la etapa del posconflicto cuenta con varios aspectos relevantes, que deben ser revisados de manera constante, teniendo en cuenta la multivariedad y riqueza cultural de esta población en el país” (p. 237). Los programas para promover el emprendimiento en esta población

deben buscar desarrollar y acentuar la sabiduría y tradición indígena de la mano de la asociatividad y productividad.

Pérez (2016) analiza bajo el enfoque de diversas teorías como teoría de conflictos, teorías de juegos y de decisiones y teorías humanas los diferentes aspectos de desmovilización, desarme y reintegración, para aprender de las experiencias y buenas prácticas en la implementación de programas de proyectos productivos implementados en otros países, que han permitido la generación de ingresos para la población, con la consiguiente estabilización económica de las regiones y la restauración del tejido social, con el fin de lograr implementarlas en nuestro país. Además, se analizan las percepciones de los desmovilizados que se han reintegrado de manera exitosa en la vida civil, han conformado hogares y han aportado a la sociedad.

En cuanto a los referentes locales, se encontraron dos documentos sobre la dinámica campesina de los municipios analizados. La Cámara de Comercio de Buga (2015) realizó la caracterización del potencial productivo de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario por medio del Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica (RUAT) en los corregimientos de Monterrey y Miraflores del municipio de Buga. La información recolectada incluía datos personales, datos económicos, participación en procesos de transferencia e innovación y asociatividad. Por otra parte, también se recolectaron datos generales de las fincas y de los productos agropecuarios producidos y la apropiación de aprendizajes por parte de los campesinos. El estudio concluye que los campesinos en su mayoría son hombres, con estudios de quinto de primaria, que obtienen cerca del 81 % de sus ingresos (fecha de corte 2014) de las actividades agropecuarias; en promedio, cada persona tiene un ingreso anual de \$1.953.159, es decir, \$162.763 mensuales. El 82 % de los campesinos habían realizado innovación en sus procesos productivos agropecuarios. Por otra parte, solo el 41 % de ellos pertenecen a una asociación y aseguran que la falta de tiempo es la razón por la cual no se asocian. El 48 % de los campesinos tienen títulos de propiedad, la tierra se usa en un 58 % para actividades ganaderas;

asimismo, disponen de nacimientos de agua y dotación de servicios públicos de agua y energía eléctrica en la finca, y de vías de acceso, pero el estado de estas es malo. Producen café, lulo, plátano, banano, caña panelera y otros cultivos en menor escala, como tomate, fresa, guanábana, cacao, mora, anturios, maíz, habichuela, yuca y cítricos (limón, naranja, mandarina). Los campesinos dedicados a la ganadería se dedican a la porcicultura de ceba y cría, y la ganadería de leche.

Hincapié et al. (2018), con un enfoque de transitoriedad de la cultura en que la identidad se transforma en la medida en que el entorno afecta la cotidianidad de los individuos y las comunidades, buscaron identificar los saberes y las prácticas sociales campesinas de los habitantes de la vereda Monterrey en Buga para generar encuentros que permitan develar la importancia de la participación comunitaria desde lo común en el contexto social y escolar; mediante el enfoque interpretativo y etnografía, lograron identificar la existencia de dificultades en la apropiación territorial, saberes y prácticas sociales campesinas propias de Monterrey y de los aprendizajes generacionales. La comunidad difícilmente era capaz de reconocerse a sí misma, los estudiantes no se reconocían como campesinos y se percibía debilidad estatal ante el fortalecimiento cultural de la región; sin embargo, existía fluidez en la exposición de sus prácticas y saberes por parte de los padres de familia (arraigo geográfico). Para esto, se propone realizar encuentros culturales como dinamizadores, potenciar la escuela como eje central de transformación cultural, la resignificación del rol campesino en la escuela y el ajuste del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a los saberes y prácticas culturales de la región.

Por último, los autores concluyen que por diferentes circunstancias, tales como la globalización, la cultura homogeneizante, la urbanización y el conflicto armado, no se ha permitido el fortalecimiento de la cultura. Sin embargo, la comunidad desde sus individualidades, a pesar de verse afectada por diversas circunstancias, se resiste a perder la vida comunitaria, “sus saberes y prácticas sociales campesinas”. De ahí la importancia y la visibilización de los “regiomontanos”. Asimismo, los encuentros pedagógicos se constituyeron en espacios para reencuentro, integración

y reconocimiento comunitario, de modo que es un mecanismo habilitante para el mantenimiento de sus saberes y prácticas sociales campesinas. En este sentido, la familia, la institución educativa, las iglesias, lugares comunes y los colectivos comunitarios son los llamados a hacer el engranaje y la unión de toda una comunidad; los diálogos intergeneracionales promovidos se constituyeron en espacios de potencialización cultural de los saberes y de las prácticas sociales campesinas.

Marco teórico

Para Schumpeter (1966), la función de los emprendedores es:

reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y, en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. (p. 75)

Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos, Ludwin von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Según los austriacos, el énfasis de Schumpeter, en el cual “el emprendedor está empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a promover la percepción errónea de que el emprendimiento es, de alguna manera, innecesario para entender la manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio” (Gómez, s. f., p. 2).

Von Mises define tres características para abordar a una persona como emprendedor. La primera es que el emprendedor es capaz de evaluar, calcular utilidades y costos, para tomar decisiones sobre la distribución de la producción. La segunda característica está basada en las decisiones

que debe tomar con respecto al uso de los factores de producción para optimizar la realización del producto. Por último, debe asumir la incertidumbre debido a la imposibilidad de predecir perfectamente el comportamiento del mercado en el futuro, solo puede suponer ese escenario y tomar decisiones al respecto (Gunning, 2000).

En este sentido, el desarrollo local promueve que la comunidad se involucre y trabaje activamente para lograr las condiciones del territorio, así, las capacidades emprendedoras contribuirán a la creación y el crecimiento de las empresas y al establecimiento de la organización social (Formichella, 2004).

El desarrollo regional se ciñe a un ámbito geográfico denominado región que combina tres dimensiones: “la espacial, la social y la individual; buscando la transformación sistemática del territorio a través del progreso de una comunidad; el fortalecimiento de la sociedad civil; el sentimiento de pertenencia regional hasta el progreso de cada individuo para su realización como persona” (Díaz y Ascoli, 2006, p. 16). Según Boisier (2016), “la región es un territorio organizado que contiene, en términos reales o en términos potenciales, los factores de su propio desarrollo, con total independencia de la escala” (p. 30).

De la misma forma, el desarrollo local parte de las necesidades locales, de los recursos locales y de la decisión de los agentes locales. Este busca fomentar las capacidades de los individuos y del lugar donde habitan, así como aumentar las libertades fundamentales que poseen para retroalimentarlas positivamente. Por ello, este tipo de desarrollo plantea la necesidad de que sea utilizado el potencial endógeno de la zona (desarrollo endógeno) y fomenta la creación de empresas locales innovadoras (Gómez, s. f.).

Asimismo, Rosales y Urriola (2011) indican que el desarrollo local define:

que las capacidades emprendedoras locales pueden ser activadas y dinamizadas para valorizar los recursos productivos tradicionales (agricultura, artesanado, pequeña y mediana industria) y no tradicionales (energías renovables, protección del medio ambiente, cuidado o valorización del patrimonio cultural local, turismo) generando nuevas actividades productivas y empleos. (citado en Álvarez, 2015, p. 21)

En este sentido, una vez se ha finalizado un conflicto armado interno, se debe dar una serie de situaciones para mantener las condiciones de paz y generar un clima propicio para el desarrollo local de la población que estuvo involucrada en el conflicto, lo cual definirá a mediano y largo plazo el éxito o el fracaso del proceso.

De acuerdo con la teoría de las capacidades, el desarrollo está centrado en los individuos como fin último; en este sentido, las cifras y las estadísticas netamente económicas no dan cuenta del bienestar y de la libertad de una población, sino que es necesario ir más allá y poner a las personas en el centro de los esfuerzos (Colmenarejo, 2016). Las capacidades son aquellas que facultan a un individuo para desarrollar una actividad o labor, se puede encontrar que estas son resultado de formación, madurez y aptitudes adquiridas en relación con su entorno, y las que se dan gracias a las condiciones presentes en el medio ambiente, las cuales generan un espacio propicio para aprovechar aspectos sociales, políticos y económicos (Rivera, 2017). Según Amartya Sen, el desarrollo se basa en la expansión de las libertades fundamentales, "están incluidas las posibilidades que poseen los sujetos de tener oportunidades de desarrollar procesos productivos, que les permitan generar su propio empleo y riqueza" (Formichella, 2004, p. 26). Esto debe permitir mejorar su calidad de vida, siempre respetando la libertad de decidir sobre su cultura, salud, educación, entre otros.

Así, la teoría de las capacidades busca que cada persona sea capaz de ser y hacer de acuerdo con sus interés y deseos; pero, para poder desarrollar esto, es fundamental contar con la libertad y las oportunidades necesarias para tener calidad de vida y desarrollo.

Morales (2013), citado en Álvarez (2015), indica que se deben dar las condiciones para que la población tenga acceso al mercado y a los factores de producción, con el apoyo de las instituciones que trabajan en el territorio, para ampliar las capacidades de la comunidad en situación de posconflicto. Asimismo, es necesario el acceso de esta comunidad a la toma de decisiones, para que exista una relación abierta y de confianza con las instituciones presentes, lo que permitirá que esta comunidad se sienta representada y se llegue fácilmente a consensos. Por otro lado, es fundamental que se asegure la dotación e infraestructura que permita ofrecer igualdad de capacidades y oportunidades a la comunidad. Por último, y no menos importante, es necesaria la reconstrucción del tejido social, la reparación de daños humanos y la reconexión de las poblaciones con su entorno y territorio, para lo cual es necesario otorgar un espacio físico territorial que se constituya en un territorio de paz.

Es claro que, para lograr un desarrollo, con inclusión económica y laboral en el contexto de posconflicto, es necesario determinar claramente el funcionamiento e impacto de las políticas de emprendimiento, dado que en un futuro próximo la mayoría de población de bajos recursos puede residir en los llamados estados frágiles, en que no existen estudios al respecto, o los efectos de la ayuda y otras políticas para el desarrollo del sector privado en países en conflicto o posconflicto (Naudé, 2013).

En conclusión, esta investigación se basa en las teorías que definen el emprendimiento como motor de desarrollo local en un contexto de posconflicto; en este sentido, se registran los aspectos conceptuales que se ajustan a estas orientaciones teóricas, que, además, resaltan la necesidad de que estos emprendimientos consideren algunas particularidades, como las características propias del territorio y los conocimientos previos, las habilidades y competencias de los individuos. Por ello, la metodología

del proyecto se orientó a la construcción de herramientas de recolección de esta información para la población objeto de estudio, mediante un muestreo por conveniencia, dada la dificultad de acceso a la información de esta población (por ser de manejo restringido por temas de seguridad) y a la realización de entrevistas y grupos focales con los actores locales relevantes del ecosistema de emprendimiento.

Referencias

- Álvarez Riascos, K. T. (2015). *Desarrollo local como herramienta de postconflicto en Colombia* (Tesis de maestría, Universidad de Alicante). <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/49586>
- Acosta Oidor, C. (2012). Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 10(1). <https://doi.org/10.21500/22563202.589>
- Aidis, R. (2005). Entrepreneurship in transition countries: A review. *Economics Working Papers*, 61. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/17505/>
- Boettke, P. y Coyne, C. (2007). The political economy of forgiveness: The necessity of post-atrocity reconciliation. *Society*, 44(2), 53-59.
- Boisier, S. (2016). Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando. En J. N. Tur (ed.), *La visión territorial y sostenible del desarrollo local: una perspectiva multidisciplinar* (pp. 23-46). Universitat de València.
- Boudreaux, K. (2007). The business of reconciliation: Entrepreneurship and commercial activity in post-conflict rwanda. *Economic Affairs*, 27(2), 6-13. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2007.00724.x>
- Brück, T., Naudé, W. y Verwimp, P. (2013). Business under fire: Entrepreneurship and violent conflict in developing countries. *Journal of Conflict Resolution*, 57(1), 3-19. <https://doi.org/10.1177/0022002712464846>
- Buultjens, J. W., Ratnayake, I. y Gnanapala, W. A. C. (2016). Post-Conflict tourism development in Sri Lanka: Implications for building resilience. *Current Issues in Tourism*, 19(4), 355-372. <https://doi.org/10.1080/13683500.2014.1002760>
- Cámara de Comercio de Buga. (2015). *Resultados de la aplicación del Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica (RUAT) a 133 productores de los corregimientos de Monterrey y Miraflores en Buga*.

- Carbal Herrera, A. (2011). Sistema de gestión social para pequeñas y medianas empresas. *Saber, Ciencia y Libertad*, 6(1), 105-118. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5755298>
- Castillo-Palacio, M., Harrill, R. y Zuniga-Collazos, A. (2017). Back from the brink: Social transformation and developing tourism in post-conflict Medellin, Colombia. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 9(3), 300-315. DOI: 10.1108/WHATT-02-2017-0012
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). "Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia (1960-2012). <https://centrodememoriahistorica.gov.co/patrones-y-campesinos-tierra-poder-y-violencia-en-el-valle-del-cauca/>
- Colmenarejo, R. (2016). Enfoque de capacidades y sostenibilidad: aportaciones de Amartya Sen y Martha Nussbaum. *Ideas y Valores*, 65(160), 121-149. <https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v65n160.43084>
- Dawley, S., Pike, A. y Tomaney, J. (2010). Towards the resilient region? *Local Economy*, 25(8), 650-667. <https://doi.org/10.1080/02690942.2010.533424>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). *Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018*. <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-Poblacion-Ajustada-por-Cobertura.xls>
- Díaz Argueta, J. C. y Ascoli Andreu, J. F. (2006). *Reflexiones sobre el desarrollo local y regional*. Universidad Rafael Landívar. <https://www.studocu.com/co/document/universidad-pedagogica-y-tecnologica-de-colombia/economia/informe/diaz-y-ascoli-reflexiones-del-desarrollo-regional/14142606/view>
- Djip, V. (2014). Entrepreneurship and SME development in post-conflict societies: The case of Bosnia y Herzegovina. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 3(2), 254-274. <https://doi.org/10.1108/JEPP-09-2012-0048>

- El Herald*o. (2016, 25 de septiembre). Un conflicto armado de más de 220.000 muertos se cierra hoy en Colombia. <https://www.elheraldo.co/politica/un-conflicto-con-mas-de-220000-muertos-se-cierra-en-colombia-287482>
- Fierro Ulloa, I. J. (2013). Comportamiento organizacional positivo: implicaciones para la organización actual. *Saber, Ciencia y Libertad*, 8(2), 103-111. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104984>
- Fierro Ulloa, I. J. y Villacres Rojas, C. E. (2014). Diagnóstico de la cadena logística de exportación del banano ecuatoriano hacia Estados Unidos de América. *Saber, Ciencia y Libertad*, 9(1), 77-90. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2014v9n1.1985>
- Formichella, M. (2004). *El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local*. <https://www.academia.edu/download/56011511/MonografiaVersionFinal.pdf>
- Gnyawali, D. R. y Fogel, D. S. (1994). Environments for entrepreneurship development: Key dimensions and research implications. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 18(4), 43-62. <https://doi.org/10.1177/104225879401800403>
- Gómez, L. A. (s. f.). *Teorías del emprendimiento*. <https://cursa.ihmc.us/rid=1NCYQZM9N-1519FM6-201S/TEORIAS%20DEL%20EMPREDIMIENTO.pdf>
- Gunning, J. P. (2000). *The idea of entrepreneur role as distinctly human action: A history of progress*.
- Hincapié Álvarez, J. M., Londoño Escobar, M. E. y Lozano Hurtado, A. M. (2018). *Las prácticas sociales campesinas y su implicación en el contexto escolar y social* (Tesis de maestría, Corporación Universitaria Minuto de Dios). <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/7705>

- Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. *Journal of Economic Geography*, 12(1), 1-32. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbr019>
- Ministerio de Trabajo. (2014). *Diagnóstico del departamento del Valle del Cauca*. <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18983328/Diagnostico+Valle+del+Cauca.pdf/c46d8a0b-c101-5093-5b5f-27240e2831aa>
- Naudé, W. (2013). Entrepreneurship and economic development: Theory, evidence and policy. *IZA Discussion Paper*, 7507. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2314802
- Novelli, M., Morgan, N. y Nibigira, C. (2012). Tourism in a post-conflict situation of fragility. *Annals of Tourism Research*, 39(3), 1446-1469. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.03.003>
- Pendall, R., Foster, K. A. y Cowell, M. (2010). Resilience and regions: Building understanding of the metaphor. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 3(1), 71-84. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsp028>
- Pérez Castillo, Y. A. (2016). *Emprendimiento productivo como facilitador para la reinserción en el postconflicto en Colombia: un análisis desde la experiencia de otros países* (Trabajo de especialización, Universidad Militar Nueva Granada). <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/15432>
- Pitre-Redondo, R., Cardona Arbeláez, D. A. y Hernández Palma, H. (2017). Proyección del emprendimiento indígena como mecanismo de competitividad en el postconflicto colombiano. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 7(2), 231-240. doi: 10.19053/20278306.v7.n2.2017.6068
- Rivera, J. (2017). Crear capacidades: propuestas para el desarrollo humano. *Mundos Plurales: Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública*, 4(1), 111-113. <https://doi.org/10.17141/mundosplurales.1.2017.3053>

- Schumpeter, J. (1966). *Capitalism, Socialism and Democracy*, London: Unwin University Books
- Solís, O. y Valencia, F. (2005). La educación en algunas cooperativas de ahorro en Querétaro. *En Reflexiones sobre cooperativismo* (pp. 80-100). Universidad Autónoma de Querétaro
- Tamayo Ortiz, H. (2015, 12 de febrero). Conflicto armado en Colombia: factores, actores y efectos múltiples. *Elmundo.com*. http://elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/conflicto_armado_en_colombia_factores_actores_y_efectos_multiples.php#.WWkmlYQ1_IX
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2018). *Índice de Riesgo de Victimización 2016-2018*. <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/medicionirv201620172018.pdf>
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2019). *Reporte Red Nacional de Información*. <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/>
- Vorley, T. y Williams, N. (2017). Fostering entrepreneurship and economic growth: Pathways to economic resilience in Kosovo. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 13(2-3), 159-177. <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2017.083019>

VOCES

« Para el gobierno yo no soy víctima, aunque toda mi familia, tuvo que salir del lugar donde vivíamos por miedo »

« Nosotros los campesinos también somos una etnia, si usted me pregunta que soy, soy campesina »

